

Suplemento de Análisis Político

Julio 2026
Edición No. 194

Perspectivas



CETCAM

Centro de Estudios Transdisciplinarios
de Centroamérica

1. *Nicaragua: una oposición activa y diversa*

Durante mucho tiempo y especialmente de 2018 hasta la actualidad, se ha repetido como mantra que la “oposición en Nicaragua está fragmentada, dividida y débil”; también se dice que la falta de unidad de los actores políticos de oposición es uno de los factores clave para que el régimen se sienta fuerte. Abundan las acusaciones y descalificaciones entre unos grupos y otros, así como la falta de confianza. Pero, cuando se observa el panorama opositor y su evolución desde 2018 hasta la actualidad desde otra perspectiva, nuevos elementos aparecen a la vista.

¿Una oposición o varias oposiciones?

En las narrativas públicas que circulan, usualmente se habla de “la oposición” en términos generales, como si ésta fuera un único ente o actor político. Lo cierto es que la oposición está compuesta por numerosos actores y organizaciones de diferente naturaleza: sociales, políticas, con diferentes preferencias e identidades ideológicas, así como perspectivas diversas sobre la transición hacia la democracia en Nicaragua. Es decir, no es una oposición homogénea, sino de naturaleza diversa.

Esto no es extraño porque la oposición, sobre todo la que está en el exilio y es más visible, representa a la diversidad de la sociedad nicaragüense. ¿Quiénes están en ese abanico? Aunque parezca una reiteración, son actores distintos que incluyen: organizaciones partidarias, es decir, que tienen la pretensión, estructura y funcionamiento de un partido político, aunque no cuenten con personería jurídica; las organizaciones de sociedad civil, como organizaciones defensoras de derechos humanos, de mujeres, juveniles, campesinas, de médicos, entre otras; están las plataformas ciudadanas, que tienen una orientación política pero no manifiestan aún una pretensión partidaria y están integradas por diferentes grupos territoriales o sectoriales. Entonces, en principio, no se trata de una sola oposición, sino de un entramado de oposiciones.



Uno de los señalamientos que se hace constantemente es que es una oposición dispersa, que no se pone de acuerdo y que cada grupo sigue su propia ruta, e intereses. Si se revisan con detenimiento las propuestas políticas y de transición que se han formulado en el transcurso del tiempo, desde 2018 hasta la actualidad, es posible ver que la mayoría de actores tienen coincidencias al menos en cuatro temas: a) la estrategia fundamental para el cambio político es la acción cívica; b) justicia, para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la dictadura de los Ortega-Murillo, pero también para toda la sociedad nicaragüense; c) libertad, para que los ciudadanos puedan expresarse y movilizarse sin restricciones, principalmente dentro del país; y d) democracia, que tiene como punto de partida la apertura de una transición política.

Las diferencias emergen sobre otros aspectos como los posicionamientos ideologizados, las ideas preconcebidas y muchas veces, prejuiciosas, y el ánimo de competencia. Esto influye en las visiones de los distintos actores y organizaciones sobre la ruta para abrir la transición y quiénes pueden encabezar ese proceso. Sobre este último punto hay una reflexión necesaria en la que no se ha avanzado y frecuentemente se soslaya; es el papel que tiene, así como el aporte de cada actor u organización, dentro y fuera del país, en la construcción de esa ruta hacia la transición y después, cuando se abra esa oportunidad.

Esa reflexión necesaria contribuiría a articular esfuerzos y complementarlos dejando a un lado las competencias y los conflictos gratuitos, muchas veces alimentados premeditadamente. Reconocer las diferencias en la naturaleza de los actores y organizaciones también posibilitaría enfocar y potenciar las estrategias de acción de acuerdo con lo que cada actor puede aportar.

No hay recetas para avanzar hacia una transición. Cada experiencia es única, con contextos y complejidades específicas, incluida

la propia transición de Nicaragua en 1990 de la que bien vale la pena, extraer algunas valiosas lecciones. Las propuestas formuladas hasta ahora es necesario verlas como eso: propuestas; no como recetas infalibles. Nadie tiene la fórmula perfecta y probablemente al momento de la transición mucho de lo que se ha propuesto, no se podrá realizar tal como se plantea, será una mezcla de las distintas propuestas, tal vez algo completamente nuevo dependiendo del contexto y las condiciones del momento, o tendrá que esperar un tiempo hasta que sea factible realizarlo.

Un escueto inventario de acciones

Sin ir más atrás, vale decir que desde 2018 la oposición se ha mantenido activa en diferentes campos de acción. Si se examina el abanico de acciones más allá de los prejuicios, es posible hacer un escueto inventario de los esfuerzos.

Las organizaciones de víctimas de la represión, familiares de personas prisioneras políticas, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales han realizado un trabajo sostenido de registro, denuncia, incidencia y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos ante instancias hemisféricas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos,



el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de facilitar insumos para los reportes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés).

A estos esfuerzos se suman los que realizan grupos específicos como las mujeres defensoras de derechos y feministas que participan en diversos espacios y acciones de incidencia en redes internacionales y otras instancias.

También las organizaciones y liderazgos de los pueblos indígenas que denuncian y hacen incidencia visibilizando la situación de las comunidades dentro del país, así como las que se han desplazado hacia otros países.

Otros grupos han realizado esfuerzos para mantener la comunicación e incidir en actores clave en Estados Unidos como el Congreso, el Departamento de Estado y otras instancias, participando en audiencias, reuniones y visitas. El resultado es que el tema de Nicaragua se ha mantenido en la agenda, ha sido incluido en acciones legislativas y proyectos de ley, sanciones a personajes del círculo de poder, además de campañas con mensajes muy claros a la dictadura Ortega-Murillo en relación a la situación de las personas prisioneras políticas en general y enfocados en ciertas personas particularmente, la persecución en contra de la iglesia católica y la libertad religiosa, las violaciones a los derechos laborales, entre otros. Otras acciones de incidencia con resultados importantes han sido los esfuerzos coordinados para la investigación de la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, relacionada con la violación de derechos laborales y humanos por parte del régimen Ortega-Murillo.

Se han realizado acciones de incidencia en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), particularmente dirigidas al grupo de países amigos de Nicaragua. El resultado es que el tema se ha mantenido en la agenda y se han aprobado varias resoluciones de consenso en contra del régimen a pesar de

su ausencia, tal como sucedió recientemente en Panamá durante la Asamblea General. Acciones de incidencia similares se han dirigido a los órganos de la Unión Europea, como el Parlamento Europeo donde también se han aprobado sanciones a personeros del régimen, así como declaraciones y pronunciamientos.

En el ámbito regional centroamericano, se han efectuado labores de cabildeo ante los países en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), para impedir que la dictadura impusiera sus candidatos en la secretaría general del organismo. Además, se ha denunciado al régimen ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violar cuatro convenios, de manera que el órgano conformó una comisión de encuesta por segunda vez en su historia para investigar a los Ortega-Murillo. Vale la pena mencionar que una comisión de encuesta es el recurso más poderoso de la organización para investigar graves violaciones a los derechos laborales en un país.

Estas no son las únicas acciones. Numeras organizaciones y grupos hacen aportes desde otras perspectivas y estrategias, por ejemplo, en la construcción de la memoria, la cultura, la formación de liderazgos y capacidades, el pensamiento crítico y la academia, la ayuda humanitaria, el acompañamiento a las poblaciones exiliadas y desplazadas, entre otras.

Los periodistas y medios independientes en el exilio no forman parte de la oposición, pero sí del ecosistema democrático de Nicaragua y con su labor de información e investigación



periodística aportan y refuerzan las acciones de incidencia de los opositores; además que constituyen un halo permanente de información crítica que llega hasta la ciudadanía en Nicaragua a pesar del cerco y la censura impuestas por el régimen Ortega-Murillo.

Tampoco se pueden dejar a un lado las acciones de resistencia que los ciudadanos realizan dentro del país; destacan, por ejemplo, los ejercicios de auditoría social sobre los aspectos económicos, políticos, la corrupción, la percepción sobre temas coyunturales y otros; además, los pequeños y a veces imperceptibles actos de resistencia que los nicaragüenses no organizados realizan diariamente para expresar su descontento a pesar de la vigilancia y la persecución.

El repertorio de acciones es mucho más amplio, ha variado con el tiempo y las condiciones del contexto, pero no hay día que no se realice alguna desde 2018 hasta la actualidad. De nada le ha valido a la dictadura perseguir a la oposición, activistas, líderes, defensores, periodistas y todas aquellas personas que en su lógica autoritaria etiqueta como opositores. Tampoco desmontar el capital social que el país había construido durante décadas con miles de organizaciones sociales, perseguir y confiscar medios de comunicación, así como proscribir partidos políticos que pudiesen representar una posibilidad de competencia en un eventual contexto electoral.

Entre esta variedad de actores y repertorios de acciones no hay coordinación ni dirección única; en muchas ocasiones los grupos y organizaciones duplican esfuerzos y hasta compiten para realizar ciertas acciones, una situación que se ha procurado mejorar en los años más recientes a través de coordinaciones previas sobre todo en función de ciertas instancias y oportunidades como la reciente Asamblea General de la OEA en Panamá.

Los escollos no están resueltos y seguramente van a seguir apareciendo, pero es justo

reconocer que los actores sociales y políticos nicaragüenses han hecho esfuerzos sistemáticos y diversos para contribuir al cambio democrático en el país.

Avances y desafíos

Ocho años y medio después de la rebelión cívica de abril en 2018, también es justo reconocer que existe un compromiso del conjunto de actores nicaragüenses que con una actitud proactiva han sostenido las acciones de resistencia dentro y fuera del país en medio de un contexto altamente complejo, represivo y con escasos recursos. También es justo reconocer la esperanza y resistencia de la ciudadanía para alcanzar el anhelado cambio democrático para Nicaragua. Todas las acciones son importantes, todos los esfuerzos contribuyen.

Como se puede apreciar en el somero recuento hay una sociedad nicaragüense activa, organizada y en resistencia, en la búsqueda de un objetivo deseado y compartido, con banderas también compartidas, que desarrolla distintas acciones desde estrategias que muchas veces, resultan complementarias. Este no es el resultado de coordinaciones colectivas o el tan perseguido acuerdo de unidad. Es más bien un pequeño avance de los diálogos y la construcción de consensos en medio de un proceso cruzado por tensiones, conflictos y marcado por las diferencias entre los actores de la oposición.

Las cosas no están resueltas, todavía hay desafíos importantes para los actores sociales y políticos nicaragüenses. Entre ellos, romper las lógicas que refuerzan las divergencias ideológicas, la competencia entre actores y las pretensiones hegemónicas. Hace falta volver la mirada con honestidad y reconocer las buenas prácticas y lecciones de experiencias que han resultado exitosas; reconocer la complementariedad de las estrategias y acciones y que cada uno tiene un aporte

importante que hacer para alcanzar la transición a la democracia. Además, es importante reconocer qué no ha funcionado. Las posibilidades de construir sinergias y potenciar la efectividad de las acciones requiere más de reconocimiento, diálogo y coordinación que acuerdos de “unidad”.

Es verdad que la primera responsabilidad del cambio en Nicaragua recae sobre los nicaragüenses, pero la salida de la dictadura y la posibilidad de abrir la transición hacia la

democracia no depende solamente de un acuerdo de unidad. Ese es uno de los factores importantes, pero también se deben considerar las condiciones mismas que los Ortega-Murillo le han impuesto a Nicaragua, así como el respaldo de la comunidad internacional.

Hay iniciativas encaminadas en esa dirección, si avanzan y se logra construir sinergias entre los actores sociales y políticos, se habrá dado un paso importante.



“ Las cosas no están resueltas, todavía hay desafíos importantes para los actores sociales y políticos nicaragüenses. Entre ellos, romper las lógicas que refuerzan las divergencias ideológicas, la competencia entre actores y las pretensiones hegemónicas. ”

2. Voces locales

La desenfrenada corrupción y las dificultades económicas son dos de los problemas que más preocupan a la población en los distintos municipios del país. De acuerdo con los testimonios de diferentes activistas sociales, en numerosas alcaldías del país, la Procuraduría General de Justicia (PGR) está realizando auditorías por las extendidas prácticas de corrupción que prevalecen. La permisividad de que gozaban alcaldes, secretarios políticos y otros funcionarios edilicios se terminó por los escandalosos niveles alcanzados por la corrupción y la restructuración de los círculos de poder en el contexto de la sucesión autoritaria.

Algunas de las prácticas corruptas más frecuentes y conocidas son los cobros de “coimas” o comisiones a contratistas de proyectos; en algunas municipalidades se sabe que los alcaldes “cobran” hasta un 50 % por otorgar los contratos; el tráfico de influencias para beneficiar a familiares o personas amigas a fin de beneficiarse con contrataciones también es parte del menú de la corrupción en el ámbito local.

El abuso y enriquecimiento a costa de los recursos estatales no se limita a los funcionarios municipales; también se conocen casos de personas que laboran para otras instituciones públicas y en otras localidades que aprovechan sus influencias para apropiarse de terrenos valiosos e instalar negocios a través de testaferros. La corrupción ha llegado a tal punto que en algunos municipios la PGR se ha presentado en diferentes oportunidades a hacer supervisiones y auditorías que han tenido como resultado la destitución de personal municipal incluidos alcaldes.

La situación económica es motivo de preocupación general entre la población, pero particularmente en los municipios de vocación agropecuaria por la sequía que está provocando el fenómeno El Niño; adicionalmente, les está afectando el encarecimiento del precio de los insumos y el bajo rendimiento de la producción. En ciertos municipios de la zona occidental del país, se han extendido los cultivos de caña y arroz que utilizan medios mecanizados, de manera que se ha incrementado el nivel de desempleo de los trabajadores agrícolas.

Esta situación coloca a las familias en una condición de alta vulnerabilidad y mayor dependencia de las remesas que reciben del exterior. Como alternativa, están realizando actividades económicas informales y en varios municipios hay migración temporal a países vecinos como El Salvador y Costa Rica, en otros casos, se conoce que también hay migración hacia España.



3. *Venezuela: entre la tragedia política y humana*

El 24 de junio pasado la naturaleza provocó una de las mayores tragedias en Venezuela y Latinoamérica. Dos terremotos consecutivos asolaron la zona costera del país con devastadoras consecuencias particularmente en la pérdida de casi 4 mil vidas humanas, más de 16 mil personas heridas o lesionadas, un número no determinado de desaparecidas y cerca de 90 mil familias afectadas, según datos a inicios de julio.

Según el gobierno interino venezolano, se ha recibido ayuda de 31 países que ha incluido varios grupos de rescatistas, unas 700 mil toneladas de ayuda humanitaria y suministros médicos, además que se han prometido 780 millones de dólares para la emergencia. La magnitud del impacto es gigantesca por el nivel de destrucción y el drama que envuelve a las personas directamente afectadas.

En Centroamérica, todos los gobiernos de la región enviaron sus mensajes de solidaridad a Venezuela, pero no todos movilizaron recursos de ayuda. Costa Rica y El Salvador enviaron grupos de rescatistas que se destacaron por su empeño, heroicidad y los dramáticos salvamentos que realizaron de personas atrapadas. Además de los grupos rescatistas, los dos países y Panamá enviaron cargamentos de ayuda para las personas damnificadas.

Cuatro cosas llaman la atención. El alcalde de la ciudad de Panamá logró reunir en tiempo récord un cargamento de ayuda humanitaria, pero colocó dispositivos de rastreo GPS ocultos para asegurarse que la ayuda llegara realmente a quienes la necesitaban. En efecto, detectaron que una parte del cargamento había seguido una ruta hacia zonas que no estaban afectadas por el desastre; situación que generó una tensión entre ambos países.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se solidarizó con los venezolanos por la tragedia, pero se distanció de colaborar porque dijo que Venezuela iba a recibir mucha ayuda y su prioridad era cuidar a Honduras. Una actitud diferente de la que adoptó el presidente salvadoreño Nayib Bukele que además de enviar un equipo de rescatistas y maquinaria, mandó cargamentos de ayuda, alquiló helicópteros para transporte y pagó servicios médicos privados para atender a las víctimas rescatadas, y no desaprovechó la ocasión para utilizar las redes sociales a su favor.

Por su lado, Nicaragua no pasó de una declaratoria pública de solidaridad a pesar de cercanos vínculos políticos y toda la cooperación recibida de Venezuela desde el gobierno de Hugo Chávez.





Venezuela: entre la tragedia política y humana

1 El 24 de junio, dos terremotos consecutivos causaron una gran tragedia en la zona costera de Venezuela, con casi 4 mil fallecidos, más de 16 mil heridos, desaparecidos y unas 90 mil familias afectadas.

2 Panamá envió ayuda con dispositivos GPS ocultos para verificar su destino, lo que reveló desvíos hacia zonas no afectadas y provocó tensión diplomática.

3 Venezuela recibió ayuda internacional de 31 países, incluyendo rescatistas, suministros médicos, ayuda humanitaria y promesas de apoyo económico por 780 millones de dólares.

4 En Centroamérica hubo muestras de solidaridad, pero no todos los gobiernos enviaron ayuda concreta. Costa Rica, El Salvador y Panamá sí movilizaron recursos y apoyo humanitario.

5 Mientras El Salvador tuvo una participación activa con rescatistas, maquinaria, ayuda y apoyo médico, Honduras decidió no colaborar directamente y Nicaragua solo expresó solidaridad pública pese a sus vínculos políticos con Venezuela.

